

Yasmín Devia Urriago

ABOGADA

Cra. 26 No. 27-28 Oficina102 Edificio Banco Bogotá, Tuluá - Tel: 3168683569

Señor

JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REPARTO)

Buga (V).

REFERENCIA: PODER PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE: EMPRESA CONSTRUIR S.A.

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, REPRESENTADA POR LA DIRECTORA REGIONAL.

JORGE HERNAN CUADROS GIL, mayor de edad, vecino de Buga, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.883.538 expedida en Buga, obrando en representación de la sociedad “CONSTRUIR S.A.”, persona jurídica legalmente constituida, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, con domicilio en Guadalajara de Buga (V), ubicado en la calle 1 Sur No. 19-186, comedidamente me permito manifestar a usted que por medio del presente escrito, confiero poder amplio y suficiente a la doctora **YASMIN DEVIA URRIAGO**, abogada titulada, en ejercicio, portador de la T. P. No.134.739 del Consejo Superior de la Judicatura, identificada con la cédula de ciudadanía No.29.873.029 expedida en Tuluá (V), para que en nuestro nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación Proceso Contencioso Administrativo Ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Art. 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) contra los actos administrativos proferidos por la Directora Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Regional del Valle del Cauca y consistentes en:

1. La Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, acto administrativo por medio del cual se ordena el pago de una obligación dineraria a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA por incumplimiento en el pago de aportes parafiscales.
2. La Resolución No. 002419 de mayo 6 de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 003403

de octubre 10 de 2013, NEGANDO la reposición y la apelación contra la decisión

tomada en la Resolución No. 002419 de octubre 10 de 2013 impugnada.

Este proceso deberá adelantarse contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Regional del Valle del Cauca, entidad representada por la Directora Regional, precisando que la demanda se impetrará en Buga (V) ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sociedad demandante tiene domicilio en Buga y la entidad demandada tiene oficina en esta ciudad.

Nuestra apoderada queda facultada expresamente para demandar, interponer y sustentar recursos, proponer excepciones y nulidades, recibir, transigir, conciliar, admitir hechos y desistir y en general para efectuar todas las peticiones que estime pertinentes para mi beneficio.

Respetuosamente solicito se le reconozca personería suficiente a la apoderada de la sociedad que represento.

Atentamente,

Acepto,

JORGE HERNAN CUADROS GIL.

C. C. No. 14.883.538 de Buga (V.).

YASMIN DEVIA URRIAGO.

C. C. No. 29.873.029 Tuluá.

T. P. No.134.739 C. S. J.

Señor

JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REPARTO)

Guadalajara de Buga (V).

REFERENCIA: DEMANDA PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE: EMPRESA CONSTRUIR S.A.

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA", REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, REPRESENTADA POR LA DIRECTORA REGIONAL.

YASMIN DEVIA URRIAGO, abogada titulada, en ejercicio, portador de la T. P. No.134.739 del Consejo Superior de la Judicatura, identificada con la cédula de ciudadanía No.29.873.029 expedida en Tuluá (V),, en nombre y representación del señor **JORGE HERNAN CUADROS GIL**, mayor de edad, vecino de Buga, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.883.538 expedida en Buga, obrando en representación de la sociedad "CONSTRUIR S.A.", persona jurídica legalmente constituida, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, con domicilio en Guadalajara de Buga (V), ubicado en la calle 1 Sur No. 19-186; promuevo ante usted demanda para proceso Contencioso Administrativo Ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Art. 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Regional del Valle del Cauca, entidad representada por la Directora Regional, que fue la representante de la dependencia que profirió los actos administrativos objeto de esta acción a saber:

1. La Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, acto administrativo por medio del cual se ordena el pago de una obligación dineraria a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA por incumplimiento en el pago de aportes parafiscales.
2. La Resolución No. 002419 de mayo 6 de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, NEGANDO la reposición y la apelación contra la decisión tomada en la Resolución No. 002419 de octubre 10 de 2013 impugnada.

La demanda se fundamenta en los siguientes,

H E C H O S

- 1º. El día 10 de octubre del 2013, la Directora Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- profirió la Resolución No. 003403 por medio de la

cual dispuso “*LIBRAR ORDEN DE PAGO*” a favor del SENA y en contra de la sociedad “CONSTRUIR S.A.”, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, por la suma de \$90.896.457,00, correspondiente a los aportes parafiscales dejados de cancelar en los períodos allí relacionados, comenzando por los períodos 6 y 7 del año 2008, o sea por los meses de junio y julio de 2008, y continuando con los periodos del 1 al 12 de los años 2009, 2010, 2011, 2012; y los períodos 1 al 4 del año 2013.

- 2º. El día 22 de noviembre del 2013, la sociedad “CONSTRUIR S.A.”, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior resolución.
- 3º. El día 6 de mayo de 2014 la Directora Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- profirió la Resolución No. 002419, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, NEGANDO la reposición y la apelación contra la decisión tomada en la Resolución No. 002419 de octubre 10 de 2013 impugnada.
- 4º. La Ley 21 de 1982, en su artículo 7, numeral 4, precisa que el obligado a hacer la contribución parafiscal al SENA es el empleador que cuente con uno o más trabajadores permanentes, **lo cual implica una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo.**
- 5º. La sociedad CONSTRUIR S. A. hace el aporte parafiscal al SENA correctamente por las personas con las cuales se tiene relación laboral, que son en total 8. Igualmente, cumple cabalmente con el tributo del FIC.
- 6º. La sociedad CONSTRUIR S. A. es una persona jurídica cuyo objeto social principal es la construcción y para ello hace contratos civiles de obra con personas naturales para llevar a cabo que la construcción de obra material, donde el contratista se encarga autónomamente del desarrollo de la obra contratada y para ello él (el contratista) puede contratar el personal que él requiera para cumplir con el objeto del contrato, sin que se genere relación laboral entre el contratante (CONSTRUIR S. A.) y el contratista.
- 7º. La legislación laboral vigente indica que para que haya contrato de trabajo se requiere, además de la prestación directa y personal del servicio por parte de una persona natural (el trabajador) a otra persona natural o jurídica y de la retribución por ese servicio, que haya una subordinación

por parte del trabajador o prestador del servicio al empleador o beneficiario del servicio, lo cual en el presente caso no se da, pues el contratista tiene autonomía en la prestación del servicio contratado, tan cierto es lo de la autonomía que es el mismo contratista el que contrata su personal para realizar la labor que necesita para cumplir con el objeto del contrato.

8º. Al no haber contrato laboral con los contratistas, sino un contrato civil, no se genera la obligación parafiscal de contribución a favor del SENA, ya que no existe, en primer lugar, contrato de trabajo ni, en segundo lugar, pago de salario y como el aporte tiene como base el salario y al no haber éste (el salario) no hay lugar al pago de la contribución. Es decir, no se cumplen con los requisitos legales para que nazca la obligación tributaria parafiscal, principalmente no se da el hecho generador requerido en la Ley 21 de 1982.

9º. El 19 de abril de 2012, el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, con ponencia del magistrado WILLIAM GIRALDO GIRALDO, en un proceso instaurado por la sociedad VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA – VERING contra el SENA, **en un caso idéntico al presente** determino confirmar la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el día 22 de enero de 2009, donde se declaró la nulidad de la Resolución No. 2265 del 1º de septiembre de 2006 expedida por la Dirección Regional de Bogotá del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de la Resolución No. 3705 del 6 de diciembre de 2002 (sic) proferida por la misma dirección, y, en consecuencia y como restablecimiento del derecho, declaró que la sociedad VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. no adeudaba las sumas relacionadas en los actos demandados.

PRETENSIONES

Basado en los hechos antes narrados y los fines indicados en el memorial poder le solicito, muy comedidamente, a su señoría se acceda a lo siguiente en la sentencia que haga tránsito a cosa Juzgada:

1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, acto administrativo por medio del cual dispuso “*LIBRAR ORDEN DE PAGO*” a favor del SENA y en contra de la sociedad “CONSTRUIR S.A.”, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, por la suma de \$90.896.457,00, correspondiente a los aportes parafiscales dejados de cancelar en los períodos allí relacionados, comenzando por los períodos 6 y 7 del año 2008, o sea por los meses de junio y julio de 2008, y continuando con los periodos

del 1 al 12 de los años 2009, 2010, 2011, 2012; y los períodos 1 al 4 del año 2013.

2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 002419 de mayo 6 de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, NEGANDO la reposición y la apelación contra la decisión tomada en la Resolución No. 002419 de octubre 10 de 2013 impugnada.
3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se restablezca el derecho de la sociedad "CONSTRUIR S.A.", identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, y se ordene el no pago a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-, toda vez que no existe causa jurídica que soporte la obligación.
4. Que se condene en costas al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-.
5. Que en el evento que durante el trámite de esta demanda se cobre el valor de la obligación que la sociedad "CONSTRUIR S.A.", identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, no reconoce por cuanto siempre ha sido cumplidor de sus obligaciones laborales, se solicita que a título de restablecimiento del derecho se ordene la devolución de la suma pagada en su valor actualizado y el pago del lucro cesante.
6. Subsidiariamente, en caso de llegar a establecer que se deben pagar aportes parafiscales, se solicita que se dé aplicación al porcentaje establecido en el artículo 4º del Decreto 2375 de 1974, es decir el 0.5% del valor de las obras que se ejecuten directamente o mediante subcontratistas.
7. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NORMAS VIOLADAS

Considero violadas las siguientes normas:

- A) Normas constitucionales: Artículo 29 (Derecho fundamental al debido proceso y de defensa), artículo 95,9; artículos 150, 10, 11, 12 y 338.
- A) Normas de carácter legal: el artículo 137 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONCEPTO DE LAS VIOLACIONES.

Las normas antes indicadas fueron violentadas por los siguientes motivos:

1º. Violación del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Infracción de las normas en que debería fundarse.

El fundamento legal de la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013 fueron la Ley 21 de 1982 y la Ley 119 de 1994.

La Resolución 002419 de 2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, señaló nuevos fundamentos jurídicos como son los Decretos 2375 de 1974 y 083 de 1976. Por tanto, se trata de un acto administrativo totalmente diferente al principal.

Dicha situación constituye una vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que la única defensa que tuvo el contribuyente fue ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

No existe fundamento legal para establecer, con base en las normas citadas, que la suma adeudada corresponde al 2% del valor anual de los contratos, toda vez que el artículo 4º del Decreto 2375 de 1974 consagra una presunción legal para la industria de la construcción, que consiste en que ésta destina un 25% de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios, en consecuencia el valor que deben pagar como aporte al SENA es de ½% del valor de las obras que ejecuten directamente o mediante contratistas.

2º. Falta de competencia del SENA para declarar derechos laborales.

Los aportes supuestamente adeudados, se originaron en el pago que la sociedad efectuó a personas naturales que fueron contratadas por vínculos civiles de obra, no laborales. De conformidad con la ley, estas personas son consideradas independientes y no están obligadas a realizar aportes al SENA o al ICBF; además, que en virtud de la Ley 21 de 1982 dicha carga impositiva corresponde exclusivamente a los empleadores sobre su nómina de salarios y no por honorarios.

El SENA no es competente para determinar que los contratos de prestación de servicios celebrados por la sociedad son de carácter laboral, puesto que ello vulnera el principio de buena fe. Además, que tratándose de una entidad administrativa no puede declarar derechos laborales entre particulares, puesto que con ello usurparía competencias asignadas a la Rama Judicial.

La Ley 21 de 1982, por la cual se modifica el Régimen de Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones, estableció:

“ARTICULO 7o. Están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA):

- 1. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias.*
- 2. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios.*
- 3. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, intendencial, distrital y municipal.*
- 4. Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes.*

(...)”

ARTICULO 9o. “Los empleadores señalados en los artículos 7º y 8º de la presente Ley, pagarán una suma equivalente al seis por ciento (6%) del monto de sus respectivas nóminas, que se distribuirán en la forma dispuesta en los artículos siguientes.

(...)”

ARTICULO 12. “Los aportes hechos por los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de los

órdenes nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital y municipal y empleadores del sector privado, tendrán la siguiente destinación:

- 1. El cuatro por ciento (4%) para proveer el pago de subsidio familiar.*
- 2. El dos por ciento (2%) para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)".*

ARTICULO 17. *"Para efectos de la liquidación de los aportes al régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Escuela Superior de Administración Pública, (ESAP), Escuela Industrial e Institutos Técnicos, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de Ley y convencionales o contractuales.*

Los pagos en moneda extranjera, deberán incluirse en la respectiva nómina, liquidados al tipo de cambio oficial y vigente el último día del mes al cual corresponde el pago".

El artículo 7º ibídem señala, dentro de los sujetos obligados a efectuar aportes al SENA, a los empleadores que ocupen por lo menos uno o más trabajadores permanentes. Este aporte corresponde al 2% del monto de sus respectivas nóminas.

Para efectos de la liquidación de estos aportes, la ley establece que se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral.

En ese sentido, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo dispone los elementos integrantes del salario: Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

Por consiguiente, la obligación establecida en la Ley 21 de 1982, de efectuar aportes al SENA, surge en virtud del vínculo laboral entre el empleador y el trabajador, y la nómina mensual de salarios es la base sobre la cual deben calcularse tales aportes. En ese sentido, el pago que el dueño de una obra realice a quien la ejecuta podría eventualmente constituir base de aportes al SENA en la medida en que dicho pago constituya "salario".

En el sub examine, las partes demandante y demandada coinciden en señalar que los aportes exigidos por el SENA se generaron por los contratistas de la empresa.

A ese respecto el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los contratistas independientes son verdaderos patronos, y no representantes ni intermediarios de las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras, por un precio determinado. La misma norma consagra a cargo del dueño de la obra una responsabilidad solidaria con el contratista, pero con relación a "*los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores*", pero no está consagrada igual responsabilidad en relación con los aportes parafiscales, como son los que corresponden al SENA.

Así mismo, nótese que la normativa invocada por la Administración como sustento legal de la obligación exigida, esto es, la Ley 21 de 1982, no establece que el empleador sea responsable o deudor solidario por los aportes parafiscales que se deriven de sus contratistas independientes, precisamente

porque los aportes a que se refiere dicha ley se originan en una relación laboral y la base de liquidación de los mismos la constituye el monto de sus respectivas nóminas, como se observa en sus artículos 9º, 12 y 17.

Además, si bien el Decreto 2375 de 1974 fue utilizado como complemento de los argumentos esgrimidos en el acto principal para referirse a las normas de la industria de la construcción, resulta improcedente dicho argumento adicional, dado que la regulación establecida en la Ley 21 de 1982 y el Decreto 2375 de 1974 está referida a contribuciones diferentes. La primera se refiere a los aportes parafiscales que debe pagar el empleador sobre la nómina de salarios pagado a sus trabajadores, es decir, se deriva de una relación eminentemente laboral, y la otra se origina por el hecho de pertenecer a la industria de la construcción y se liquida sobre el 0.5% del valor de las obras que ejecuten directamente o mediante sus subcontratistas.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las liquidaciones se expiden con fundamento en la Ley 21 de 1982 y la administración de manera específica citó los artículos 7, 11, 12, 14 y 17, normativa en la que se establece el porcentaje del aporte correspondiente al SENA (2%) y cómo se liquida el mismo, es claro que a la sociedad demandante, en los términos de los actos aquí demandados no le asistía obligación derivada de los contratistas de la empresa.

3º. Violación del artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El acto principal está viciado de falta de motivación porque únicamente tuvo como fundamento la Ley 21 de 1982 y sólo en la resolución que la confirmó se citó la normativa sobre la industria de la construcción, en particular los Decretos 2375 de 1974 y 083 de 1976.

De aceptarse la validez de los actos demandados se estaría obligando al contribuyente a pagar dos veces por un mismo concepto tributario, puesto que la presunción establecida en el artículo 4º del Decreto 2375 de 1974 solo se da cuando la empresa no ha realizado los pagos de los aportes parafiscales por los empleados vinculados mediante contrato de trabajo, situación que no se configuró en el presente caso como se verificó en la investigación administrativa.

El SENA, en la resolución que resolvió el recurso de reposición, consideró como pago a empleados de la empresa lo que en la contabilidad de la sociedad aparece como pago a contratistas. Lo anterior, no obstante que la empresa le explicó en la inspección que tal concepto obedecía a todo pago que se hacía a los contratistas.

4º. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa por omitir el procedimiento para establecer la liquidación presuntiva.

De conformidad con el Concepto No. 1-0014-026300 del 19 de julio de 2006, cuando no se tiene a disposición la nómina de los obreros debe seguirse el procedimiento establecido en la Resolución No. 0662 de 1986, por la cual se reglamentan los procedimientos para el recaudo y control de la contribución destinada al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, relativo a la liquidación presuntiva, el cual no fue practicado por la entidad administrativa.

5º. Desviación del poder.

Las actuaciones de los funcionarios del SENA buscan perjudicar a la sociedad "CONSTRUIR S.A.", identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, haciéndolo responsable del pago de los aportes parafiscales adeudados por sus contratistas.

P R U E B A S

Respetuosamente solicito se tengan como pruebas allegas por mi poderdante las siguientes:

DOCUMENTAL:

- 1o)** La Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, acto administrativo por medio del cual se ordena el pago de una obligación dineraria a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA por incumplimiento en el pago de aportes parafiscales.
- 2o)** La Resolución No. 002419 de mayo 6 de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, NEGANDO la reposición y la apelación contra la decisión tomada en la Resolución No. 002419 de octubre 10 de 2013 impugnada.
- 3o)** Solicito se libre oficio a la Directora del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- Regional del Valle del Cauca, a fin de que se aporte al expediente, para que obre como prueba documental, todos los documentos que hacen parte del expediente contentivo del trámite efectuado para la expedición de las Resoluciones No. 003403 de octubre 10 de 2013 y No. 002419 de mayo 6 de 2014 dentro del expediente seguido en contra de la sociedad “CONSTRUIR S.A.”, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4.

PROCEDIMIENTO

El del proceso ordinario previsto en los artículos 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

COMPETENCIA Y CUANTIA

De conformidad con lo indicado en el artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es suya, señoría, por la naturaleza del asunto, la cuantía que no supera los \$110.000.000,00, el domicilio de la sociedad demandante que es la ciudad den Buga y la entidad demandada tiene oficina en esta ciudad.

A N E X O S

Se allegan con la presente demanda los siguientes anexos:

1. Poder a mí conferido para actuar en este asunto.
2. El documento anunciado como prueba documental.
3. Tres (3) copias de la demanda y sus anexos.

MEDIDA CAUTELAR.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito que se decrete, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, o sea la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, acto administrativo por medio del cual se ordena el pago de una obligación dineraria a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA por incumplimiento en el pago de aportes parafiscales; y la Resolución No. 002419 de mayo 6 de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 003403 de octubre 10 de 2013, NEGANDO la reposición y la apelación contra la decisión tomada en la Resolución No. 002419 de octubre 10 de 2013 impugnada.

Esta petición se hace teniendo de presente lo dispuesto en el artículo 231 Ibídem y que el adelantar proceso de cobro coactivo cuando se está discutiendo la legalidad de los actos administrativos puede ocasionar un grave perjuicio a la sociedad demandante, debido a que al practicarse medidas cautelares se retendrían sumas de dinero que afectarían gravemente el funcionamiento normal de la sociedad en lo concerniente al cumplimiento de sus obligaciones laborales y comerciales con los proveedores y con las instituciones financieras.

NOTIFICACIONES

Demandante:

La sociedad “CONSTRUIR S.A.”, persona jurídica legalmente constituida, identificada con el N. I. T. 800.071.745-4, puede ser notificada por intermedio del señor **JORGE HERNAN CUADROS GIL**, mayor de edad, vecino de Buga, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.883.538 expedida en Buga, con domicilio en Guadalajara de Buga (V), ubicado en la calle 1 Sur No. 19-186.

La apoderada:

La suscrita recibirá en la Secretaría del Juzgado o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 15 No. 5-55 de Buga (V) y en el teléfono celular No. 3168683569.

Demandada:

La Directora Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Regional del Valle del Cauca, puede ser notificada en la Oficina del SENA en la ciudad de Buga (V), ubicada en el cruce de las carreteras que conducen de Buga a Buenaventura (V) y a Guacarí (V).

Atentamente,

YASMIN DEVIA URRIAGO.
C. C. No. 29.873.029 Tuluá (V)
T. P. No.134.739 C. S. J.